

Educación política INSTITUCIONES SOCIALES

En una Constitución del siglo XX, que no fuese un calco de las antiguas, que tuviese presente lo que es la sociedad a diferencia del Estado, debería haber lugar para «instituciones sociales» (y no estatales, menos aún «políticas»). Las únicas instituciones sociales que son reconocidas son las «privadas» —por ejemplo, las empresas—, y para eso es curioso ver la hostilidad que suscitan cuando muestran su carácter institucional, sobre todo si las acompaña alguna originalidad. Las llamadas «multinationales» (quizá mejor «transnacionales»), aparte de lo de la consigna general contra ellas y de los abusos que ocasionalmente puedan cometer, son miradas con ojeriza por muchos que tropiezan con algo nuevo, original y que no se reduce a lo ya sabido.

Sería menester la inclusión deliberada de instituciones «sociales públicas». Si los historiadores miraran desde este punto de vista el pasado, encontrarían que la historia europea está llena de ellas, aunque no se llamasen así. Y que a ellas se debe buena parte de lo interesante y creador que se ha hecho durante siglos. La misma Iglesia, considerada temporalmente; los ordenes religiosos; los antiguos gremios y gildas; durante mucho tiempo la Mesta; las hermandades de labradores; las escuelas y Universidades medievales, y buena parte de las de la Edad Moderna; las academias, desde el Renacimiento; los colegios profesionales; multitud de organizaciones que ha regulado la navegación —y, por cierto, de manera transnacional o supranacional—, la pesca, el comercio marítimo, Consulados del Mar o como se llamasen. Todo esto ha sido absorbido más o menos plenamente por el Estado en los países europeos, sometido a reglamentos dictados por un ministro o un parlamento, según los casos, administrado por funcionarios, sujeto a los vaivenes de la política, a las tensiones del partidismo.

Me pregunto si es necesario, o conveniente. Si no urge devolver a la sociedad lo que es suyo. Ahora se habla mucho de «descentralización», entendiendo por ello devolver a las regiones una parte considerable de lo que en los últimos tiempos ha sido misión del poder central. Pero se entiende por esto una fragmentación del Estado, una multiplicación de él, nunca una devolución de funciones a las «sociedades» particulares que integran la nación. La forma más eficaz de descentralización sería la socialización de lo estatal en la medida de lo posible. Pero

la confusión terminológica es tal, que suele llamarse «socialización» o «nacionalización» a la operación inversa: aquella por la cual se pone en manos del Estado lo que todavía la sociedad, la nación, tenían en las suyas.

Una de las ventajas principales de la Monarquía es proporcionar al país algo que no se pone en cuestión, lo cual permite, sin demasiado riesgo, poner en cuestión «casi» todo lo demás. (Y digo «casi» porque la política no puede poner en cuestión las cosas que son previas a ella y más profundas, por ejemplo la realidad misma del país; esto sólo lo hace la política totalitaria, que precisamente es la supresión de la política; si se quiere aplicar, invirtiéndola, la famosa frase de Clausewitz, «la guerra —civil— con otros medios».) Ese marco de referencia «dentro» del cual acontecen los cambios permite que éstos sean amplísimos y profundos, y da a las Monarquías una capacidad de transformación muy grande. Cuando un país tiene un régimen determinado, y no se trata de una imposición, aun en el caso de que no se haya llegado a él por vías enteramente libres de presiones, parece aconsejable sacar el máximo partido posible de sus posibilidades y virtudes, reducir al mínimo sus limitaciones o peligros, tratar, finalmente, de lograr que tenga un máximo de legitimidad social, que goce del consenso mayoritario.

La Monarquía puede ser el instrumento de la estabilidad social y al mismo tiempo de la flexibilidad que pertenece a las variaciones sociales, frente a las legales. Una ley se puede cambiar de la noche a la mañana, tal vez por el capricho de un ministro; un uso social, por ejemplo el uso del «tú» y el «usted», es mucho más seguro y estable; pero para que la ley cambie hace falta una decisión de gobierno, que puede tardar años en producirse, mientras que el uso cambia constantemente, está en perpetua fluidez, admite innumerables grados, matices, excepciones, ensayos, rectificaciones.

Pienso en los aspectos de la vida nacional que no deben estar a merced de la política, de los partidos, menos aún del partidismo. El tesoro artístico, por ejemplo; el conjunto de creaciones centenarias que constituyen el patrimonio nacional —sin mayúsculas institucionales y burocráticas—; no estoy seguro de que su administración deba estar en manos del Gobierno; creo más bien que debería ejercerla la sociedad, asesorada por

los hombres de prestigio y competencia acreditados. ¿No podría corresponder al Rey la presidencia, coordinación, inspiración de instituciones al margen de los cambios políticos, de las oscilaciones que debe haber en la política, que deben mantener una continuidad viva, ágil, sin rupturas ni bandazos? Lo mismo habría que decir del conjunto del patrimonio histórico y cultural de la nación, aunque no tenga tan inmediata realidad material como las ciudades, los edificios, las esculturas, los cuadros. La lengua española y las demás lenguas de España, la literatura, la historia, la investigación, todo eso forma parte de la realidad del «país» y no puede ser objeto de tratamiento directamente político. Las academias han sido desde su fundación «Reales», patrocinadas por los reyes, dotadas de exenciones y privilegios, en alguna medida fomentadas por ellos; pero veo con inquietud que «dependan» del ministro de Instrucción Pública o de Educación o como se llame en cada temporada, como sucede desde el siglo XIX, que estén en sus manos, que su existencia y su estructura estén condicionadas por la mayor o menor discreción o por los compromisos políticos del titular.

Podrían existir Consejos formados por las personas de mayor prestigio en la nación —y esto suele querer decir también fuera de ella—, destinados a asesorar al Rey (y no a encadenarlo), coordinados por él, que constituyeran un amplio organismo «social» encargado de estimular y regular la vida de los estratos más profundos del país, aquellos de que se nutre todo lo demás. Y el Rey podría asociar a esta empresa no estrictamente política, no de gobierno, a las personas más relevantes, sin excluir a la más próxima y elevada, cuya ausencia de la vida nacional es ya de por sí una tremenda injusticia y una dificultad insuperable para la estabilización dinámica de la nación.

Y no es esto todo. He hablado hasta ahora como si la realidad de España terminara en sus fronteras nacionales. En ellas concluye, ciertamente, la función del Estado, el poder del Gobierno. Pero la «sociedad» española va más allá, y tiene que actuar hasta donde se extienden sus propios límites. La sociedad española es una de las sociedades hispánicas. Solamente una de las que en otro tiempo se llamaron «las Españas».

Julián MARIAS

El lío BURGUESES Y BURGUESIA

QUIZA no sea demasiado fácil dilucidar dónde, cómo y cuándo el término «burgués» empezó a adquirir la connotación injuriosa que actualmente constituye su carga semántica más visible y manejada. Alguien, sin duda, ya habrá intentado una historia de la palabra, con el detalle de la evolución de sus acepciones. En todo caso, el tránsito de un sentido designativo, neutro, al insulto puro y simple, debió de producirse en el siglo pasado, desde luego, pero no resulta muy claro su origen. En buena lógica, hay que suponerlo en los avatares de la lucha de clases, probablemente en el uso diario de los trabajadores industriales, o bien a través de la literatura de combate —arenga o panfleto, canción o manifiesto— a que las circunstancias daban pie. Sospecho que, en este contexto, el nombre sustantivo «burgués» iba acompañado, por lo general, de adjetivos denigrantes, para precisar su alcance polémico. Sin embargo, ¿no habrá influido en el fenómeno, y no poco, la ira y el desdén que los literatos y los artistas del Ochocientos dedicaron a sus propias familias? Ellos no se molestaban en adjetivar el sustantivo: les parecía obvio que con decir «burgués» bastaba. Y, en efecto, a su insistencia ha de atribuirse el valor de epíteto —de adjetivo calificativo— que hemos heredado.

El asunto no es baladí, a mi entender. Con el tiempo, el empleo de «burgués» como vocablo infamante no ha hecho más que prosperar, y eso a costa de la limpieza discursiva en materias económicas, sociológicas, históricas. A menudo, cuando uno lee monografías aparentemente serias, queda desconcertado ante la ambigüedad de la exposición, porque no acaba de ver claro si los autores «definen» o «juzgan». Lo cual es especialmente frecuente en los individuos que se desean marxistas o marxianos y que no han aprendido el método. Recuerdo cierto papel de un destacado profesor «soi-disant» socialista —español, por más señas— que constituía una grotesca paliza a la

memoria de Voltaire: al señor aludido, Voltaire le caía mal porque era burgués. ¿Qué diablos quería que hubiese sido el pobre Arouet en pleno XVIII? ¿Un Lenin? Al cátedro a que aludido Lenin le pone carne de gallina, para mayor inri. Esta carencia de «sentido histórico» es lo menos marxista o marxiano que cabe imaginar; es, por añadidura, un «delito de lesa Historia». Como ese, cada día se cometen muchos. Tomando el santo nombre de Marx en vano, y no sólo en el terreno de la «historia» académica.

Ocorre que, en tales embrollos, lo que pesa no es el instrumental interpretativo de Marx sino la amargura clasista —burguesa— de Baudelaire o de Flaubert. Cuando Marx hablaba de la «burguesía» se refería a una «clase» y a todo lo que dicha clase suponía; cuando lo hacían Baudelaire o Flaubert acusaban solo un determinado comportamiento de la misma clase, sin duda, reprochado por «filisteo». Marx, Baudelaire y Flaubert eran contemporáneos estrictos: el primero nació en 1818, los otros en 1821, si las enciclopedias no yerran. Pero la distancia «ideológica» que les separa es inmensa. La palabra «burgués», transmitida con el vicio de esta confusa coincidencia, da hoy una cosecha inicuca de estupideces, que nunca acabaremos de comprender si olvidamos la fuente de que proceden. Jules Renard, ya avanzada la centuria, escribió en su «Journal» una sarcástica observación que recoge el ánimo de la casta «intelectual»: «Los burgueses son los demás». Era una manera de expresar la reacción exasperada de unos «burgueses» disidentes, inconformistas o contestatarios, según el léxico actual, pero criaturas de su clase. ¿Pasaban hambre, tal vez? No Flaubert, no sé si Baudelaire. Si Léon Bloy, el gran detractor de la «burguesía», y tan «burgués» en su miseria...

El problema se complica con sus variantes locales. No todas las «burguesías» —no todos los «burgueses»— han funcionado igualmente. El esquema del «Manifiesto» no sirve, por

ejemplo, a escala celtibérica. ¿Es que no hubo burgueses en la España del XVIII y del XIX? Si, y no sólo en Cataluña. Pero aquí, si se me permite una mención emblemática, nadie «tomó la Bastilla». Como bromeaba el otro: aquí sólo se han «tomado» algunas «Bastillas de goma». Y aun eso es una exageración. Desde el ángulo de los historiadores, la «burguesía española», o las diversas «burguesías» inconexas que crecieron en la Piel de Toro, no fueron capaces de cumplir su «misión»: la de ser «revolucionarias» cuando era el momento. ¿Porque no podían, porque no querían? Poder y querer son conceptos de escasa entidad heurística, si no se les asume dialécticamente. Podríamos enunciar una serie de episodios conflictivos, desde los ministros de Carlos III hasta Cambó o Azaña, pasando por las Cortes de Cádiz, en los que las «burguesías» invocadas demostraron su incapacidad constitucional. Su drama, ahora, es que han de recibir bofetadas de ambos lados: de sus niños y del proletariado. Y las de su crisis estructural. Es su problema.

No termina en ello el incidente. El hecho de que la palabra «burgués» se haya convertido en una pelota de tenis, que se lanzan unos a otros deportivamente, como puñados de inmundicia, se traduce en una ridícula operación literaria. «Tú eres un burgués» y «El burgués eres tú» son frases que fluyen en el fondo de muchas peleas verbales a que asistimos. Y «burgueses» son unos y otros, en la medida en que no son «proletarios», ni menos «lumpen», lo que se evidencia automáticamente. Los protagonistas del debate llevan en su carnet de identidad una confesión de clase descarnadamente rotunda: estudiantes, profesores, ingenieros, abogados, líderes a sueldo, poetas, pintores, curas, algún obispo incluso, cuadros de toda especie, gente «intelectual», en suma. La verdadera multitud sofocada sigue siendo muda, y cuando chillan no es automáticamente para meterse en su trinchera de clase. Las

inefables propuestas de «la tierra para el que la trabaja», o «el taxi para quien lo trabaja», sin ir más lejos, representa una curiosa tentativa de multiplicar la propiedad privada. No ha de sorprendernos el éxito que ha tenido la fórmula «pequeña-burguesía». Alguien, causticamente, sostenía que el obrero es «un bourgeois qui n'a pas réussi». Es injusto postularlo del obrero. Pero sí es lícito aplicarlo al resto: a los médicos, a los juristas, a los biólogos, a los del marketing, a la empleomanía entera de bancos y sociedades anónimas, al escalafón universitario, y a lo que ustedes saben.

¿«Pequeña-burguesía»? El tamaño no importa. O sí. Pero las mutuas aficciones de «burgués», necesariamente trivializadas a esta escala, son ultrajes boomerang: que revienten a quien los emite. Todos somos «pequeño-burgueses» mientras no se demuestre lo contrario, y no se demostrará lo contrario acerca de los que protagonizan el juego de ofensas mutuas. El «burgués» ha sido desplazado por los multinacionales, y el «capitalismo monopolista», a la orden del día, está dejando cesante al «capitalismo competitivo» tradicional. Los grupúsculos de extrema izquierda suelen ser unos residuos de la «pequeña-burguesía» exasperada. Como los de extrema derecha. Y cuando «burgués» es un «comodin» para incordiar al prójimo, y no más, la conclusión es que Marx y Engels, y Lenin, y hasta Trotski, que es un Duns Escoto del marxismo, perdieron el tiempo. No lo perdieron, desde luego. Sólo que sus parásitos contribuyen a la ceremonia de la confusión. Un vecino con un cochecito utilitario, ¿es un burgués? Sí y no. Un ama de casa con una lavadora eléctrica y un hornillo de butano ¿es una «burguesa»? Sí y no. Los dirigentes de la Oposición extremista, ¿son «burgueses»? Sí y sí. O «pequeño-burgueses». De ese lío deriva la tomadura de pelo general.

Joan FUSTER

BAZAR Perpiñá
Rda. San Pablo, 4, 6 y 8 Rda. Universidad, 21 - Tels. 242.17.35 - 318.79.94

**PERPIÑA ESTA CON TODA CATALUÑA
COMPRE HOY A PRECIOS DE AYER**

50 años al servicio de Cataluña

TV. COLOR 64.444,-
TV. PORTATIL 10.555,-
LAVADORA AUTOMÁTICA 10.777,-
FRIGORÍFICO 6.666,-

CON LA GARANTÍA Y SERVICIO PERPIÑA
transporte gratis a toda Cataluña

MOQUETAS SERVANEST

llamar a SERVANEST para limpiar moqueta hídrica
tel. 3217712
C/da. Juan Francisco 17
Ba. Sabana 41

DIBUTECA

2 en 1
Ha resuelto el problema de su mesa de trabajo

Graduables y Planas

ARAGÓN, 451 (entre Marina y Lepanto) - Tel. 225.49.15